



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

SECRETARÍA GENERAL

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

NOM
(en caractères d'imprimerie)

REÇU LE A HEURES

REÇU PAR TELEFAX LE A HEURES

SIGNATURE

REPR. PERM. ESPAÑA U.E.
BRUSELAS
ENTRADA

Fecha 09 JUL. 2004

Asunto:

Carta de emplazamiento, Artículo 228 TCE.

Infracción nº 1997/2069.

La Secretaría General le remite adjunta una carta de la Comisión, en relación con el asunto anteriormente mencionado, rogándole la transmita al Señor Ministro de Asuntos Exteriores

Por el Secretario General, 

Anexo: C(2004) 2450

Bruselas,

SG-Greff(2004)D/

- 9 -07- 2004

202763

REPRESENTACIÓN PERMANENTE
DE ESPAÑA ANTE LA
UNIÓN EUROPEA
Boulevard du Régent, 52-54.

1000 - BRUXELLES



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

SECRETARÍA GENERAL

Bruselas,

SG-Greffe(2004)D/

- 9 -07- 2004

202763

REPRESENTACIÓN PERMANENTE
DE ESPAÑA ANTE LA
UNIÓN EUROPEA
Boulevard du Régent, 52-54.

1000 - BRUXELLES

Asunto: Carta de emplazamiento, Artículo 228 TCE.

Infracción nº 1997/2069.

La Secretaría General le remite adjunta una carta de la Comisión,
en relación con el asunto anteriormente mencionado,
rogándole la transmita al Señor Ministro de Asuntos Exteriores

Por el Secretario General

Anexo: C(2004) 2450



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 07/07/2004

1997/2069

C(2004) 2450

Excmo. Sr. Ministro:

Tengo el honor de recabar la atención de su Gobierno sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de mayo de 2003, en el Asunto C-419/01, Comisión / Reino de España. Esta sentencia fue dictada como consecuencia del recurso de incumplimiento presentado por la Comisión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 226 del Tratado de la Comunidad Europea, en el marco del procedimiento de infracción registrado con la referencia 97/2069.

El motivo de dicho recurso, interpuesto por la Comisión el 23 de octubre de 2001, es el incumplimiento del artículo 5 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al haber realizado el Reino de España la identificación oficial de zonas sensibles en sólo algunas partes de su territorio.

En esta sentencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al no haber identificado las zonas sensibles de la cuenca hidrográfica intracomunitaria de la Comunidad Autónoma de Cataluña y de las aguas costeras de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Valencia, Baleares y Canarias y de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Según el apartado 1 del artículo 228 del TCE, si el Tribunal de Justicia declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.

Excmo. Sr. D. Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Plaza de la Provincia, 1.
E – 28012 MADRID

En consecuencia, el Reino de España está obligado a conformarse a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia y, paralelamente, la Comisión debe cerciorarse del estricto cumplimiento de la sentencia más arriba indicada.

A título preliminar, conviene destacar que el procedimiento de infracción 97/2069, y el cumplimiento de la sentencia que actualmente se verifica, es independiente del nuevo procedimiento de infracción 2002/2123, relativo también al cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Directiva 91/271/CEE en relación con las zonas sensibles, pero que tiene un ámbito mucho más amplio. En el marco de dicho procedimiento de infracción, la Comisión notificó una carta de emplazamiento al Reino de España en diciembre de 2003 que incluye, entre otros aspectos, la insuficiente designación de zonas sensibles por parte del Estado español.

Como ya se ha indicado, el procedimiento de infracción 97/2069 se refiere al hecho de que el Reino de España había realizado la identificación oficial de zonas sensibles en sólo algunas partes de su territorio. De acuerdo con el artículo 5.1 de la Directiva 91/271/CEE, el plazo para cumplir esta obligación finalizaba el 31 de diciembre de 1993.

Conviene recordar que mediante la Resolución de 25 de mayo de 1998 de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 30 de junio de 1998, se declaraban las zonas sensibles en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, competencia de la Administración General del Estado.

En lo que se refiere a las aguas costeras y a las cuencas hidrográficas que son competencia de las Comunidades Autónomas, el proceso de declaración oficial de zonas sensibles se ha realizado a cuentagotas por parte de las distintas Comunidades Autónomas desde el año 1998 hasta la actualidad.

A la vista de lo anterior, el recurso de la Comisión ante el TJCE se limitó en la práctica al incumplimiento de determinadas Comunidades Autónomas. Durante el procedimiento jurisdiccional la Comisión tuvo a bien reducir al objeto de su recurso debido al cumplimiento posterior de algunas Comunidades Autónomas, que procedieron entonces a designar sus zonas sensibles, como es el caso de Galicia, Murcia y Cantabria.

Hay que señalar que ya más avanzado el procedimiento jurisdiccional, mediante escrito de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea de 21 de febrero de 2002 (A-24/4745), las autoridades españolas comunicaron a la Comisión la Resolución de 12 de enero de 2002 del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, por la que se da publicidad a la relación de las zonas sensibles correspondientes a las cuencas internas de Cataluña y de las zonas sensibles por eutrofización potencial en las zonas costeras. Esta Resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de 1 de febrero de 2002.

Tras recaer la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 2003 en el Asunto 419/01, mediante escrito de 26 de junio de 2003 (ENV/523206), la Comisión solicitó información al Gobierno español sobre las medidas adoptadas para ejecutar la citada sentencia. En dicho escrito se recordaba lo dispuesto en el artículo 228 del TCE, así como las comunicaciones emitidas por la Comisión con respecto a la aplicación del mismo, otorgando un plazo de tres meses a las autoridades españolas para su respuesta.

Hay que señalar que, en respuesta al citado escrito, las autoridades españolas han remitido a la Comisión diversas comunicaciones informando de las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas concernidas. Se relacionan a continuación, de manera cronológica y resumida, las distintas informaciones recibidas de las autoridades españolas en relación con este asunto.

Mediante escrito de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea de 20 de junio de 2003 (A-24/8551), se remiten una serie de informaciones relativas a la Comunidad Autónoma de Baleares. Así, se informa que el Gobierno de las Islas Baleares ha aprobado, en sesión celebrada el 9 de mayo de 2003, el denominado Decreto de Zonas Sensibles, que determina y regula todo lo referente a dichas áreas. Las autoridades españolas han transmitido una copia del Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el que se declaran las zonas sensibles en las Illes Balears, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 29 de mayo de 2003.

Mediante escrito de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea de 25 de julio de 2003 (A-24/10084), se remiten las observaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias con respecto a la sentencia del TJCE de 15 de mayo de 2003. Las autoridades autonómicas mantenían en dicha respuesta que en Canarias sólo existen zonas menos sensibles, pero no zonas sensibles. Se señala que dicha Comunidad Autónoma entiende que, ante la ausencia de zonas sensibles según los estudios realizados por el órgano competente, el incumplimiento se refiere a la falta de publicación en el Boletín Oficial de Canarias de dicha ausencia de “zonas sensibles”. Se indica que, por este motivo, y dada la tardanza en la tramitación del expediente administrativo de aprobación del Plan Hidrológico de Canarias, se ha instado del órgano competente de dicha Comunidad Autónoma la adopción de una resolución que sea publicada en el Boletín Oficial de Canarias para dar así cumplimiento al artículo 5 de la Directiva 91/271/CEE. Se indica que esta circunstancia sería comunicada posteriormente a la Comisión Europea.

Hay que señalar que ha sido en el marco del procedimiento de infracción 2002/2123 antes mencionado, y en respuesta a la carta de emplazamiento de la Comisión, remitida mediante escrito de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea de 29 de marzo de 2004, cuando las autoridades españolas han comunicado una copia de la Orden de 27 de enero de 2004, del Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, mediante la cual se declaran zonas sensibles en las aguas marítimas continentales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE. Por lo tanto, las autoridades españolas competentes han revisado su postura inicial en este tema, designando finalmente zonas sensibles. Esta Orden ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 4 de febrero de 2004.

Mediante escrito de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea de 4 de agosto de 2003 (A-24/10563), se remite el informe elaborado por la Generalidad Valenciana en relación con este asunto. Se señala que tras la declaración oficial de zonas sensibles realizada por el Ministerio de Medio Ambiente mediante Resolución de 25 de mayo de 1998, y al no existir cuencas intracomunitarias en el ámbito de la Comunidad Valenciana, quedó pendiente la designación oficial de las zonas costeras, cuyo trámite corresponde a la propia Comunidad Autónoma. Se informa que, en este sentido y para

dar cumplimiento a esta obligación, se aprobó la Orden de 30 de agosto de 2002, de las Consellerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se declaran zonas sensibles en las aguas marítimas del ámbito de la Comunidad Valenciana. Se adjunta una copia de dicha Orden que fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 5 de septiembre de 2002.

Mediante escrito de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea de 18 de septiembre de 2003 (A-24/11765), se remite el escrito enviado por el Gobierno Vasco en relación con este asunto. Así, las autoridades autonómicas informan del estado de la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del TJCE de 15 de mayo de 2003. Se indica que el borrador de Decreto para la declaración de las zonas sensibles en el ámbito de las cuencas intracomunitarias del País Vasco ha sido sometido a trámite de audiencia de los municipios y organismos eventualmente afectados por la declaración. Se señala que, finalizado este trámite de audiencia, está previsto someter en el mes de octubre de 2003 el borrador de Decreto a informe del Consejo Vasco del Agua. Se añade que se espera que el proceso de aprobación del Decreto esté finalizado a lo largo del año 2003 y que una vez aprobado el mismo se comunicará esta circunstancia a la Comisión Europea. Hay que señalar que, hasta la fecha, la Comisión no se ha recibido dicha declaración oficial.

Mediante escrito de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea de 19 diciembre de 2003 (A-24/16358), se remite el informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Se adjunta certificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2003, acordando que “no existen zonas sensibles en Ceuta”. Asimismo, se acompaña un ejemplar del Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de 5 de diciembre de 2003, en el que aparece publicado el citado acuerdo.

La Comisión ha analizado las distintas respuestas remitidas por las autoridades españolas en este caso. Se considera que las Comunidades Autónomas de Cataluña, Baleares, Valencia y Canarias, así como la Ciudad Autónoma de Ceuta, han tomado las medidas necesarias para conformarse con el Derecho Comunitario y ejecutar la sentencia del TJCE de 15 de mayo de 2003.

No obstante, aunque hayan realizado trámites preparatorios en este sentido, se constata que la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha procedido aún a una declaración oficial con respecto a la designación de zonas sensibles en su territorio en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con el artículo 5 de la Directiva 91/271/CEE.

A la vista de las informaciones de que dispone, la Comisión considera que el Reino de España no ha tomado las medidas necesarias para ejecutar la sentencia de 15 de mayo de 2003 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el Asunto C-419/01.

Por lo tanto, la Comisión de las Comunidades Europeas considera que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 1 del artículo 228 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

La Comisión invita a su Gobierno, de conformidad con el apartado 2 del artículo 228 de dicho Tratado, a remitirle sus observaciones en relación con todo lo anterior en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la presente carta de emplazamiento.

Una vez conocidas esas observaciones o si dichas observaciones no se le envían en el plazo prescrito, la Comisión se reserva el derecho de emitir, si procede, el dictamen motivado previsto en el apartado 2 del artículo 228 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Por otra parte, la Comisión recaba la atención de su Gobierno sobre las sanciones pecuniarias que el Tribunal de Justicia puede imponer, en virtud del apartado 2 del artículo 228 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, a un Estado miembro que no haya cumplido su sentencia.

Con arreglo al mismo artículo, si la Comisión recurre al Tribunal de Justicia, indicará el importe que considere adecuado a las circunstancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado.

Reciba, Sr. Ministro, el testimonio de mi más alta consideración.

Por la Comisión

Miembro de la Comisión



**PROJET DE
LETTRE DE MISE EN DEMEURE ART. 228 TCE**

INFRACCION 1997/2069

Non exécution de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 mai 2003 dans l'affaire C-419/01, concernant la désignation officielle des zones sensibles au titre de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dans certaines régions du territoire espagnol.

(traduction)

Monsieur le Ministre:

J'ai l'honneur d'attirer l'attention de votre Gouvernement sur l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 mai 2003, dans l'affaire C-419/01, Commission contre le Royaume d'Espagne. Cet arrêt a été rendu suite au recours en manquement introduit par la Commission, aux termes de l'article 226 du Traité de la Communauté européenne, dans le cadre de la procédure d'infraction enregistrée sous la référence 97/2069.

Le motif dudit recours, introduit par la Commission le 23 octobre 2001, est le manquement de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, puisque le Royaume d'Espagne avait effectué la désignation officielle des zones sensibles seulement dans certaines parties de son territoire.

En cet arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, en n'ayant pas procédé à l'identification des zones sensibles du bassin hydrographique intracommunautaire de la Communauté autonome de Catalogne et des eaux côtières des Communautés autonomes du Pays basque, de Catalogne, de Valence, des Baléares et des Canaries ainsi que de la ville autonome de Ceuta.

Aux termes de l'article 228, paragraphe 1, du traité CE, l'Etat membre reconnu par la Cour de justice comme ayant manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du

Excmo. Sr. D. Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Plaza de la Provincia, 1.
E – 28012 MADRID

traité est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

En conséquence, le Royaume d'Espagne doit se conformer à ce que la Cour de justice a déclaré et, parallèlement, la Commission doit vérifier le strict accomplissement de l'arrêt précité.

. /.

A titre préliminaire, il convient de relever que la procédure d'infraction 97/2069, et l'exécution de l'arrêt que actuellement est vérifié, est indépendant de la nouvelle procédure d'infraction 2002/2123, concernant également le respect des obligations découlant de la directive 91/271/CEE par rapport aux zones sensibles, mais qui a une domaine beaucoup plus grande. Dans le cadre de ladite procédure d'infraction, la Commission a notifié une lettre de mise en demeure au Royaume d'Espagne en décembre 2003 qui comprend, parmi autres aspects, la désignation insuffisante des zones sensibles de la part de l'Etat espagnol.

Comme il a déjà été indiqué, la procédure d'infraction 97/2069 concerne le fait que le Royaume d'Espagne avait effectué la désignation officielle des zones sensibles seulement dans certaines parties de son territoire. Aux termes de l'article 5.1 de la directive 91/271/CEE, le délai pour accomplir cette obligation a expiré le 31 décembre 1993.

Il convient de rappeler que par Résolution du 25 mai 1998 du Secrétariat d'État des Eaux et Côtes du Ministère de l'environnement, publiée au journal officiel de l'État du 30 juin 1998, ont été déclarées les zones sensibles dans les bassins hydrographiques intercommunautaires, qui relèvent de la compétence de l'administration générale de l'Etat.

En ce qui concerne les eaux côtières et les bassins hydrographiques qui relèvent de la compétence des Communautés autonomes, le procès de déclaration officielle des zones sensibles a été effectuée petite à petite par es Communautés autonome depuis l'année 1998 jusqu'à présent.

Vu ce qui précède, le recours de la Commission auprès de la CJCE a été limité dans la pratique au manquement des certaines Communautés autonomes. Lors de la procédure juridictionnelle la Commission a bien voulu de réduire l'objet de son recours à cause de l'accomplissement postérieur de plusieurs Communautés autonomes, qui ont procédé alors à la désignation de leurs zones sensibles, comme Galicia, Murcia et Cantabria.

Il faut noter que dans un état plus avancé de la procédure juridictionnelle, par lettre de la Représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne du 21 février 2002 (A-24/4745), les autorités espagnoles ont communiqué à la Commission la Résolution du 12 janvier 2002 du Département de l'environnement de la Generalitat de Catalogne, par laquelle est rendue publique la liste des zones sensibles concernant les bassins internes de Catalogne et des zones sensibles par eutrophisation potentielle dans les zones côtières. Cette Résolution a été publiée au journal officiel du Gouvernement de la Communauté autonome de Catalogne du 1 février 2002.

Suite à l'arrêt de la Cour de justice du 15 mai 2003 dans l'affaire C-419/01, par lettre du 26 juin 2003 (ENV/523206), la Commission s'est enquis auprès du Gouvernement espagnol des mesures prises pour exécuter l'arrêt de la Cour de justice susmentionné. Cette lettre a rappelé les dispositions de l'article 228 du TCE, ainsi que les communications émis par la Commission en relation avec son application, en octroyant un délai de trois mois aux

autorités espagnoles pour la réponse.

Il faut noter que, en réponse à la lettre précitée, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission diverses communications en informant des mesures adoptées par les Communautés autonomes concernées. Les différentes informations fournies par les autorités espagnoles en relation avec ce sujet sont exposées ci-dessous, de manière chronologique et résumée.

Par lettre de la Représentation Permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne du 20 juin 2003 (A-24/8551), ont été transmis une série d'informations relatives à la Communauté autonome de Balears. Il a ainsi été informé que le Gouvernement des Îles Balears a approuvé, en séance qui s'est tenue le 9 mai 2003, le Décret des Zones Sensibles, qui détermine et règle tout ce qui concerne lesdites zones. Les autorités espagnoles ont transmis une copie du Décret 49/2003, du 9 mai, par laquelle sont déclarées les zones sensibles dans les Îles Balears, publié au journal officiel de la Communauté autonome du 29 mai 2003.

Par lettre de la Représentation Permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne du 25 juillet 2003 (A-24/10084), ont été transmis les observations de la Communauté autonome des Canaries par rapport à l'arrêt de la CJCE du 15 mai 2003. Les autorités régionales ont signalé dans ladite réponse que en Canaries il y a seulement de zones moins sensibles, mais pas de zones sensibles. Il est indiqué que cette Communauté autonome considère que, vu l'absence de zones sensibles selon les études réalisées par l'organe compétent, le manquement se réfère à l'absence de publication dans le journal officiel des Canaries de ladite absence de « zones sensibles ». Il est indiqué que, pour ce motif, et à cause du retard dans les démarches du dossier administratif pour approuver le Plan hydrologique des Canaries, il a été demandé à l'organe compétent de ladite Communauté autonome l'adoption d'une résolution qui sera publiée dans le journal officiel des Canaries afin de faire respecter de cette façon l'article 5 de la directive 91/271/CEE. Il est signalé que cette circonstance serait communiquée postérieurement à la Commission européenne.

Il faut noter qu'il a été dans le cadre de la procédure d'infraction 2002/2123 précitée, et en réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission, transmise par lettre de la Représentation Permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne du 29 mars 2004, quand les autorités espagnoles ont communiqué une copie de l'Ordre du 27 janvier 2004, du Ministre régional des infrastructures, transports et logement du Gouvernement des Canaries, par laquelle ont été déclarées les zones sensibles dans les eaux maritimes continentales dans le domaine de la Communauté autonome des Canaries, afin de respecter ce qui est prévu dans la directive 91/271/CEE. Par conséquent, les autorités espagnoles compétentes ont révisé sa position initiale dans ce sujet, et elles ont finalement désigné des zones sensibles. Cette Ordre a été publiée au journal officiel des Canaries du 4 février 2004.

Par lettre de la Représentation Permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne du 4 août 2003 (A-24/10563), a été transmis le rapport élaboré par le Gouvernement de la Communauté autonome de Valence en relation avec cette affaire. Il est indiqué que suite à la déclaration officielle des zones sensibles effectuées par le Ministère de l'environnement par Résolution du 25 mai 1998, et n'ayant pas de bassins intracommunautaires dans la Communauté autonome de Valence, reste encore la désignation officielle des zones côtières, démarche qui relève de la compétence de la

Communauté autonome. Il est informé que, dans ce sens et pour accomplir cette obligation, il a été approuvé l'Ordre du 30 août 2002, des Départements régionales de l'environnement et des travaux publics, urbanisme et transports, par laquelle ont été déclarées les zones sensibles dans les eaux maritimes dans le domaine de la Communauté autonome de Valence. Il a été envoyé ci-joint une copie de ladite Ordre, qui a été publiée au journal officiel de la Generalitat de Valence du 5 septembre 2002.

Par lettre de la Représentation Permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne du 18 septembre 2003 (A-24/11765), a été transmis le rapport envoyé par le Gouvernement basque en relation avec ce sujet. Les autorités régionales informent ainsi de l'état de l'adoption des mesures nécessaires pour accomplir l'arrêt de la CJCE du 15 mai 2003. Il est indiqué que le projet de Décret visant à déclarer les zones sensibles dans le domaine des bassins intracommunautaires du Pays basque a été soumis à une période de consultation des municipalités et organismes éventuellement concernés par cette déclaration. Il est signalé que, une fois terminé cette consultation, est envisagé de soumettre dans le mois d'octobre 2003 le projet de Décret au Conseil basque de l'eau afin d'obtenir son avis. Il est ajouté qu'il est prévu que le procès d'approbation du Décret sera terminé lors de l'année 2003 et que, une fois approuvé le Décret, cette circonstance sera communiquée à la Commission européenne. Il faut noter que, à cette date, la Commission n'a pas reçu ladite déclaration officielle.

Par lettre de la Représentation Permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne du 19 décembre 2003 (A-24/16358), a été transmis le rapport élaboré par le Département de l'environnement de la Ville autonome de Ceuta. Il est envoyé ci-joint une certification de l'accord adopté par le Conseil de Gouvernement de la Ville autonome de Ceuta, en séance qui s'est tenue le 1 décembre 2003, en accordant que «il n'y a pas de zones sensibles à Ceuta». Il est également envoyé une copie du journal officiel de la Ville de Ceuta du 5 décembre 2003, dans lequel est publié ledit accord.

Les différentes réponses fournies par les autorités espagnoles dans ce cas ont fait l'objet d'une analyse par la Commission. Il ressort de cette analyse que les Communautés autonomes de Cataluña, Baleares, Valencia y Canarias, ainsi que la Ville autonome de Ceuta, ont pris les mesures nécessaires pour se conforme au droit communautaire et pour exécuter ainsi l'arrêt de la CJCE du 15 mai 2003.

Nonobstant, même si les démarches préparatoires dans ce sens ont été effectuées, la Commission peut constater que la Communauté autonome du Pays basque n'a pas encore procédé à faire une déclaration officielle par rapport à la désignation des zones sensibles dans son territoire dans le domaine de ses compétences, au titre de l'article 5 de la directive 91/271/CEE.

Dans l'état actuel de ses informations, la Commission considère que le Royaume d'Espagne n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'exécuter l'arrêt du 15 mai 2003 de la Cour de justice des Communautés européennes, dans l'affaire C-419/01.

En conséquence, la Commission des Communautés européennes estime que le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne.

La Commission invite votre Gouvernement, conformément à l'article 228 paragraphe 2 du même traité, à lui faire parvenir ses observations sur ce qui précède dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre de mise en demeure.

Après avoir pris connaissance de ces observations ou si ces observations ne lui étaient pas transmises dans le délai prescrit, la Commission se réserve le droit d'émettre, s'il y a lieu, l'avis motivé prévu à l'article 228, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

La Commission attire, en outre, l'attention de votre Gouvernement sur les sanctions pécuniaires que peut imposer la Cour de justice, en vertu de l'article 228, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, à un Etat membre qui ne s'est pas conformé à son arrêt.

En vertu de ce même article, la Commission, lorsqu'elle saisit la Cour de justice, indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Par la Commission

A rectangular grey box used to redact the signature of the Commission member.

Membre de la Commission